

MARÍA Y LA VULNERABILIDAD EN PUERTO RICO

Prof. Eileen V. Segarra Alméstica

RESUMEN

La devastación causada por el huracán María en Puerto Rico sin duda afecta de manera más aguda a los sectores más vulnerables: los pobres, los adultos mayores, los niños, las personas con condiciones de salud críticas, así como a otras poblaciones marginadas. Este trabajo relaciona la experiencia vivida en Puerto Rico con el paso de María con la literatura existente sobre los efectos de desastres naturales en poblaciones vulnerables. La vulnerabilidad pre-existente se evidencia con datos de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico, evaluación que se complementa con la información recopilada por partes de prensa sobre los efectos del huracán en estas poblaciones. También se evalúa el rol del gobierno federal y del gobierno de Puerto Rico en su respuesta a la emergencia y las debilidades que ha mostrado el sistema federalista en su respuesta a los desastres naturales. Se finaliza con una serie de recomendaciones para reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, haciendo hincapié en la importancia de desarrollar el capital social como amortiguador de los efectos de desastres naturales para la población en general, pero muy especialmente para aquellos que enfrentan mayores riesgos.

Palabras clave: vulnerabilidad, desastre natural, pobreza, Puerto Rico

INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2017 el huracán María entró a Puerto Rico cruzando la Isla de sureste a noroeste. Aunque su efecto se sintió en toda la Isla, su visita prestó especial atención a los municipios más pobres de Puerto Rico. Entró por la región sureste, donde se encuentra una franja de municipios con altos niveles de desempleo y pobreza y subió por el área central, donde ubica el corredor de pobreza más marcado de la Isla. Como dato de referencia, de acuerdo con los recuentos periódicos del paso del huracán, se mencionan 22 municipios por donde paso el ojo del huracán y, por tanto, donde azotó con mayor furia. De estos 22 municipios, 18 presentan niveles de pobreza sobre el promedio en Puerto Rico, y en 12 de ellos más de la mitad de la población reporta ingresos por debajo del límite de pobreza. Más aún, independientemente de la ruta del huracán, sabemos que es de esperarse que su paso afecte los niveles de pobreza y desigualdad.

Este artículo utiliza como marco de referencia la experiencia internacional con desastres naturales para analizar la reciente vivencia en Puerto Rico con el huracán María y su efecto en los sectores más vulnerables. Se tiene como propósito el entender cómo la convergencia de factores de vulnerabilidad preexistentes y las deficiencias en la gestión gubernamental han producido resultados alarmantes. A raíz de este análisis se desarrollan recomendaciones para evitar resultados similares en ocasiones futuras.

Existe una amplia literatura académica que relaciona los desastres naturales con la pobreza. Bui, Dungey, Nguyen, & Pham (2014) encuentran aumentos estadísticamente significativos tanto en los índices de pobreza como en los de desigualdad a raíz de desastres naturales en Vietnam. De manera similar, Morris et.al. (2002) estiman que el huracán Mitch de 1998 aumentó el por ciento de ciudadanos bajo pobreza en Honduras de 69.2% a 74.6%. Un aumento de similar magnitud en Puerto Rico llevaría la tasa de pobreza a aproximadamente un 50%. Estos aumentos en pobreza surgen no

solo a consecuencia de la pérdida de ingresos, también de la pérdida de activos. Dada la destrucción causada por el huracán María a su paso por Puerto Rico, y el hecho de que su efecto fue sentido con potencia en toda la Isla, podríamos esperar un aumento aún mayor en las pérdidas de activos físicos e infraestructura y la contracción en la actividad económica provocada por la falta de energía eléctrica. Más aún, en municipios como Comerío, uno de los que sintió la furia directa del centro del fenómeno, con una tasa de pobreza de 60% previo al huracán, podríamos ver a cerca de dos terceras partes de su población bajo pobreza luego de su paso.

Además, Puerto Rico, uno de los países más desiguales del mundo, enfrenta un panorama de mayores contrastes entre grupos sociales. La crisis económica y fiscal en la Isla sirvió de excusa para la implantación de medidas de austeridad que de por sí propician una mayor desigualdad. Es de esperar que un desastre natural de la magnitud de María socave aún más la posición de los sectores más pobres. La literatura sobre el impacto de los fenómenos naturales concuerda en que los efectos adversos de estos fenómenos impactan de manera más aguda a los sectores pobres y otros sectores vulnerables (Sawada & Takasaki, 2017) (Karim & Noy, 2016a) (Karim & Noy, 2016b). Esta vulnerabilidad se define como las limitaciones en la capacidad para anticipar, asimilar, resistir y recuperarse del impacto de los fenómenos naturales (Masozera, Bailey, & Kerchner, 2007).

Las poblaciones más pobres son más vulnerables a los desastres naturales por diversas razones. El hecho de carecer de redes adecuadas de información limita su capacidad de preparación. Además, suelen vivir en sectores más propensos a daños en los que el valor de la propiedad es menor, ya sea en lugares que están más expuestos a desastres, o en estructuras de débil construcción (McMahon, 2007). Su habilidad para prepararse ante fenómenos naturales también puede verse limitada a consecuencia de problemas de movilidad en momentos de evacuación. Como ejemplo, en New Orleans, previo al huracán Katrina, 20% de los hogares no contaba con un vehículo propio. Además, el limitado acceso a

seguros también aumenta la vulnerabilidad de la población pobre. En el caso de New Orleans, Masozera, et.al (2007) encontraron una correlación negativa entre los niveles de pobreza y la cobertura de seguros a nivel de subdivisión geográfica.

Los hogares más pobres también enfrentan dificultades en el proceso de recuperación debido a que poseen menos recursos para la reconstrucción, sufren de falta de acceso adecuado a servicios de salud, enfrentan mayor dificultad en trasladarse a los centros de ayuda, se topan con estructuras de ayudas que típicamente no están orientada a la población vulnerable y su acceso al financiamiento es limitado. Por el contrario, los sectores de clase media son más propensos a solicitar ayudas y saben manejar mejor el sistema (Pastor, et al., 2006). En el caso de Katrina, el 82% de las solicitudes a la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) fueron denegadas porque los ingresos no eran suficientemente altos o el *rating* de crédito era muy bajo (Masozera, Bailey, & Kerchner, 2007). El ejemplo más claro de estructuras de ayuda mal orientadas ha sido la experiencia actual post-María con la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Esta ha requerido que los beneficiarios potenciales llenen la solicitud de ayuda por internet o por vía telefónica. Esto discrimina contra los sectores más vulnerables que no dominan o tienen acceso a los sistemas de internet, y es inaceptable en un momento cuando las comunicaciones en el país estaban en el piso, y aquellos más necesitados eran los que tenían menor probabilidad de utilizar este tipo de mecanismo.

LA VULNERABILIDAD EN PUERTO RICO

En el caso de Puerto Rico, previo a la llegada del huracán, tanto el gobierno central como los gobiernos municipales se esforzaron en la transmisión de información. Además, la redes sociales, tecnológicas o personales, fueron de gran ayuda. De igual modo, ambos niveles de gobierno parecen haber sido bastante efectivos en los

procesos de evacuación. Sin embargo, este huracán, de igual manera que lo hizo el huracán Georges en 1998, mostró la realidad de la pobreza en Puerto Rico marcada por la falta de viviendas seguras. Es este uno de los talones de Aquiles de Puerto Rico. Los eventos naturales propenden a un efecto desigual en los sectores más pobres que viven en las construcciones más pobres, en los lugares más propensos a inundaciones y a derrumbes.

Más allá de la población pobre, hay otros sectores que también son vulnerables en Puerto Rico, entre estos, los adultos mayores, la población impedida o crónicamente enferma, la población rural y las poblaciones marginadas, entre estas, mujeres e inmigrantes. Claro está, estos grupos no son mutuamente excluyentes, sino todo lo contrario.

La vulnerabilidad de la población de adultos mayores ante los desastres naturales se evidenció durante el huracán Katrina, ya que el 71% de las muertes ocasionadas por este correspondieron a personas de 60 años o más (Marcelin, Horner, Ozguen, & Kocatepe, 2016). Su vulnerabilidad se presenta de diversas maneras. En un trabajo realizado por esta autora para el Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico se incluye un cálculo de pobreza multidimensional. Para el 2012, el por ciento de personas con 65 años o más bajo el nivel de pobreza era 40.9%, un poco menor que para toda la población (44.7%). Sin embargo, al estimar la pobreza multidimensional, que toma en consideración el nivel de ingreso, educación, calidad de trabajo, condiciones de vivienda, acceso a cubierta médica y discapacidades, entre otros, el por ciento de personas mayores de 65 años viviendo en hogares multidimensionalmente pobres aumenta a 63% en comparación con un 53.5% para el resto de la población, lo que denota las limitaciones económicas que enfrentan más allá del nivel de ingresos. Además, suelen presentar limitaciones de movilidad ya sea por condiciones físicas, mentales o restricciones sociales. También, en muchos casos son víctimas de aislamiento, lo que limita sus redes de información. Esta vulnerabilidad reduce su capacidad de prepararse para los desastres y también su capacidad de buscar ayuda luego de estos. Marcelin, Horner, Ozguen,

y Kocatepe (2016) recomiendan utilizar la tecnología existente y la información accesible previa a desastres para diseñar un sistema de ubicación para centros de ayuda que tome en consideración dónde residen los adultos mayores. Yo añadiría también la población menor de 65 años pero con discapacidades o enfermedades crónicas, que también sufre de limitaciones similares. De igual modo, una política pública de preparación debe tomar en consideración el acceso a servicios médicos para estas poblaciones.

Flanagan, Gregory, Hallisey, Heitgerd, y Lewis (2011) construyen un indicador de vulnerabilidad a eventos naturales a ser estimado por área geográfica, basado en datos censales. El propósito es que se conozcan los factores de vulnerabilidad más prevalentes en diversas localidades. Este indicador identifica cuatro dimensiones: estatus socio-económico, composición del hogar, estatus minoritario, vivienda y transportación. Dentro de las variables relacionadas al estatus socio-económico que identifican vulnerabilidad se incluyen: el nivel de pobreza e ingresos, el desempleo y la baja escolaridad. Dentro del componente de composición del hogar se incluye: la presencia en el hogar de menores de 18 años o mayores de 64 años, la inclusión de miembros con discapacidades y el ser un hogar con una jefa(e) sin cónyuge y con hijos menores de 18 años. Para la dimensión de estatus minoritario se toma en consideración el por ciento de la población que pertenece a un grupo minoritario y de personas mayores de cinco años que no domina el inglés. Finalmente, dentro de la categoría de vivienda y transportación, el indicador toma en cuenta el por ciento de hogares en estructuras con más de diez unidades o en casas móviles, hogares ocupados con más personas que cuartos, el por ciento de personas en alojamientos grupales (incluye personas institucionalizadas y en otros tipos de viviendas grupales) y el por ciento de hogares sin vehículo de motor. Este Indicador de Vulnerabilidad Social (SVI) sugerido por Flanagan et. al. ha sido acogido por la Agencia para el Registro de Enfermedades y Sustancias Tóxicas del Departamento de Salud de EE.UU. (ATSDR, por sus siglas en inglés) y es utilizado para la preparación de mapas que muestran

el indicador general de vulnerabilidad y sus sub-componentes a nivel de *census tract*.¹

Tomando como base el concepto de pobreza multidimensional y el índice de Flanagan et., al. (2011) se presenta a continuación una listas de vulnerabilidades cuya prevalencia podemos medir con los datos de la Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico (PRCS, por sus siglas en inglés). Para este análisis se utiliza la muestra de cinco años correspondiente al 2015.² Nótese que el listado que se presenta a continuación no abarca necesariamente todas las formas de vulnerabilidad, sino aquéllas que pueden medirse a través de los datos del PRCS. Dentro de los aspectos observables en el PRCS, se considera que un individuo tiene una alta propensión a ser vulnerable ante el embate de fenómenos naturales si cumple alguna de las siguientes condiciones:

- su ingreso familiar está por debajo del límite de pobreza,
- es mayor de 15 años y se encuentra desempleado,
- es menor de 18 años,
- tiene 65 años o más,
- es mayor de 24 años y no ha alcanzado un diploma de escuela superior,
- es una persona mayor de cinco años con algún tipo de discapacidad, ya sea cognitiva, física, mental, sensorial u otra discapacidad que impida vivir de forma independiente,
- es inmigrante, ya sea naturalizado o ilegal,
- vive en un hogar liderado por un jefe o una jefa soltera con hijos menores de 18 años,
- vive en un hogar que se considera inadecuado, ya sea porque es una estructura tipo casa móvil, bote, van, tienda de

¹ Estos mapas pueden obtenerse a través <https://svi.cdc.gov/map.aspx>. Los mismos están disponible para Puerto Rico.

² Los datos se obtuvieron a través de la base de IPUMS USA preparada Ruggles, Genadek, Goeken, Grover y Sobek (2017)

campaña o similar, carece de facilidades de aseo adecuadas o hay hacinamiento,³ o

- reside en un hogar que no cuenta con un vehículo de motor,
- habita en una estructura de viviendas múltiples.

Cabe resaltar que las poblaciones marginadas sufren por las dificultades que representa navegar por un sistema de ayudas que no está hecho para cubrir sus necesidades. Aspectos como el discrimen o la corrupción también pueden afectar su recuperación ante desastres naturales. Pastor, et al., (2006) indican que luego del huracán Andrew (1992) los negros o los hispanos (no cubanos) fueron más propensos que los blancos a recibir cantidades inadecuadas en sus seguros. No obstante, en el listado de aspectos de vulnerabilidad para Puerto Rico no se incluyó la raza, no porque se quiera invisibilizar el racismo existente, sino por entender que la variable del Censo no recoge las connotaciones raciales en la Isla. Tampoco se incluye el factor de género, ya que el mismo está reflejado en otros aspectos como la pobreza y la prevalencia de hogares de jefas con hijos. Sí se incluye la condición de inmigrante, íntimamente asociada a las discusiones de discrimen en Puerto Rico.

La Tabla 1 presenta el por ciento de la población de Puerto Rico que al 2015 cumplía con cada una de estas condiciones. La extensión de la pobreza, la baja escolaridad y la prevalencia de jefas(es) de familia solteras(os), son los tres aspectos más prevalentes. Casi la mitad de la población (46%) está bajo los niveles de pobreza, mientras que aproximadamente una cuarta parte no tiene diploma de cuarto año, o vive en hogares liderados por una jefa(e) soltera(o). También es importante notar que 40% de la población son menores o adultos mayores, y 22% de la población es discapacitada. Estos grupos suelen necesitar ayuda, tanto en los procesos de preparación como de recuperación ante desastres naturales. Debe hacerse la salvedad de que el por ciento que habita viviendas inadecuadas

³ Se entiende que existe hacinamiento si el número de personas en el hogar excede el número de cuartos en el hogar.

probablemente esté subestimado ya que el censo no permite medir la cantidad de viviendas en zonas inundables, con techos de madera o zinc o en áreas propensas a deslizamientos.

Tabla 1

Por ciento de la población de Puerto Rico sujeto a cada aspecto de vulnerabilidad (PRCS 2015, muestra de 5 años)	
Aspecto de vulnerabilidad	% de la población
Ingreso familiar bajo el nivel de pobreza	46%
Persona de 25 años o más que no tiene diploma de escuela superior	26%
Habita en un hogar con una jefa o un jefe soltero con hijos menores de 18 años	26%
Menor de 18 años	23%
Persona discapacitada	22%
Persona de 65 años o más	17%
Habita en un hogar sin un vehículo de motor	13%
Habita en una vivienda inadecuada	9%
Persona desempleada	8%
Habita en una vivienda en una estructura múltiple	6%
Es inmigrante	3%

Los datos incluidos en la tabla se limitan a la población no institucionalizada. Sin embargo, Flanagan et., al. (2011) hacen hincapié en la vulnerabilidad de las poblaciones institucionalizadas, cuyos procesos de evacuación y relocalización en caso de emergencia son complicados. De acuerdo con los datos del PRCS 2015, se estima que la población institucionalizada en Puerto Rico es de alrededor de 25,000 personas.

Como mencionamos anteriormente, los factores de vulnerabilidad no son mutuamente excluyentes. En los datos se encontró que el 82% de la población cumple con alguna condición de vulnerabilidad. No obstante, más de la mitad (55%) cumple con dos condiciones o más y un 31% cumple con tres o más condiciones de vulnerabilidad. Son las poblaciones con múltiples factores de vulnerabilidad los más propensos a sufrir pérdidas sustanciales ante el embate de fenómenos naturales. Es por esta razón que es de suma

importancia realizar este tipo de análisis a nivel de municipio y a nivel de barrio, para poder identificar dónde están las poblaciones más necesitadas y qué factores de vulnerabilidad tienen más prevalencia en cada localidad.

Tabla 2

Comparación de prevalencia de vulnerabilidades en la población de las 7 ciudades más grandes y resto de la Isla.				
	7 ciudades principales	Resto de la Isla	Diferencia	valor-p
Ingreso familiar bajo el nivel de pobreza	39.9%	47.3%	-7.4%	0.000
Menor de 18 años	21.7%	23.0%	-1.3%	0.000
Persona de 65 años o más	17.9%	16.2%	1.7%	0.000
Habita en un hogar con una jefa o un jefe soltero con hijos menores de 18 años	28.2%	25.3%	2.9%	0.000
Es inmigrante	7.3%	1.4%	5.9%	0.000
Habita en un hogar sin un vehículo de motor	16.4%	11.4%	5.0%	0.000
Habita en una vivienda inadecuada	7.1%	9.7%	-2.6%	0.000
Habita en una vivienda de estructura múltiple	14.6%	3.8%	10.8%	0.000
Persona desempleada	8.4%	8.2%	0.2%	0.177
Persona de 25 años o más que no tiene diploma de escuela superior	21.4%	28.1%	-6.7%	0.000
Persona discapacitada	21.9%	22.3%	-0.3%	0.003

Una de las lecciones de María es el reconocimiento de la vulnerabilidad de las comunidades rurales en Puerto Rico ante la amenaza de derrumbes, que no solo limitan su accesibilidad, sino también pueden ocasionar la pérdida de vida. Los datos del PRCS no permiten identificar si la persona vive en una zona rural o urbana, sin embargo, sí identifican a los residentes de las siete ciudades más grandes: Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce, San Juan y Guaynabo. Esto hace posible comparar la prevalencia de los factores de vulnerabilidad en estas ciudades principales con el resto de la Isla. La Tabla 2 presenta esa comparación. La tabla incluye los porcentajes de la población en cada grupo que cumplen el criterio para cada aspecto de vulnerabilidad, la diferencia entre los porcentajes

para las siete ciudades principales y los correspondientes al resto de la Isla y el valor-p obtenido para la prueba t que mide si las diferencias en las proporciones son estadísticamente significativas.⁴

Todas las diferencias son estadísticamente significativas, con excepción del por ciento de desempleados. Para los municipios es importante conocer y entender estas diferencias al establecer sus planes de preparación, mitigación y recuperación. Las diferencias positivas indican aquellos aspectos de vulnerabilidad que son más prevalentes en las ciudades grandes. Entre estos se encuentran: la presencia de adultos mayores, la prevalencia de hogares con jefas(es) solteras(os) con hijos, la presencia de inmigrantes, hogares sin vehículos y el residir en condominios. Estas vulnerabilidades presentan retos particulares, uno de estos es tener planes de evacuación de zonas de alta densidad, tomando en cuenta las dificultades de las viviendas de unidades múltiples y la población sin acceso a vehículos. También implica asegurar disponibilidad de ayuda para sectores marginados, tener planes específicos para áreas donde se concentran los adultos mayores y tomar en cuenta las necesidades de los habitantes de condominios ante la falta de servicios básicos.

Por otro lado, entre los factores con una prevalencia relativa mayor en el resto de la Isla están: la pobreza, la presencia de menores, la prevalencia de viviendas inadecuadas, una población con menos educación y una mayor prevalencia de personas discapacitadas. A esto podemos añadir que la mayoría de las zonas rurales se concentran fuera de las ciudades principales. Los resultados muestran que es en el resto de la Isla donde reside una mayor concentración de los sectores económicamente más desventajados.

⁴ La prueba t se utiliza para determinar si la diferencia en la proporción entre dos grupos es estadísticamente significativa. El valor-p representa la probabilidad de que el estimado de la diferencia entre grupos provenga de una población donde realmente no existe diferencias entre los grupos. Por tanto, mientras más bajo es el valor p, mayor es la probabilidad de que realmente exista una diferencia entre estos. Interpretamos un valor p menor a 0.05 como indicativo de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y un valor p entre 0.05 y 0.10 como marginalmente significativo.

Padilla-Elías, et al. (2016) destacan la vulnerabilidad de las poblaciones con necesidades médicas. Esto incluye no solo la población de adultos mayores y discapacitada, mencionada anteriormente, sino también la población con enfermedades crónicas. En comparación con EE.UU., Puerto Rico presenta una mayor prevalencia de enfermedades crónicas de riñones en adultos, diabetes, asma e hipertensión. Además, tanto la prevalencia de diabetes como la de cáncer aumentó del 2004 al 2012 (Segarra-Alméstica & Cordero-Nieves, 2016). Estas son poblaciones en particular riesgo ante desastres naturales, ya que necesitan tratamiento continuo.

A los grupos antes mencionados también debemos añadir el sector de personas dueñas de pequeños negocios, quienes han visto su operacionalidad reducirse o eliminarse a consecuencia de las pérdidas materiales, la falta de electricidad y los altos costos de producir su propia energía. Este sector también enfrenta serias limitaciones de financiamiento, lo que limita su poder de recuperación (Segarra Alméstica, Correa Matos, Rodríguez Roldán, & Carrasquillo Casado, 2016).

LOS ESTRAGOS DE MARÍA EN LA POBLACIÓN VULNERABLE

Un estudio comprensivo de los efectos de María en las poblaciones vulnerables en Puerto Rico debe esperar a que los datos oficiales comiencen a producirse y diseminarse. No obstante, la información disponible a través de la prensa nos da una idea la magnitud del efecto. A su paso por Puerto Rico, María dejó a la Isla entera sin servicio de electricidad, 60% de la población sin servicio de agua potable y las telecomunicaciones prácticamente inservibles. Al día siguiente solo siete hospitales operaban con generadores de energía. Las inundaciones tocaron los 78 municipios, una gran cantidad de carreteras (en especial en el interior de la Isla) quedaron incomunicadas, y un sinnúmero de puentes se tornaron intransitables, asilando a muchas comunidades rurales. Se estima que 472,000 hogares sufrieron daños (*El Nuevo Día y Primera Hora*, 2017). De estos, alrededor 75,000 hogares fueron destruidos y 250,000 fueron

severamente afectados. Sin embargo, a un mes del huracán, solo se habían entregado 40,000 toldos livianos y se había aprobado la instalación de 4,245 toldos pesados, de los cuales apenas se habían instalado 439 (Sosa Pascual & Mazzei, 2017). Las opciones para estas familias parecen ser escasas. A tres meses del huracán permanecían 29 refugios abiertos, con 461 refugiados (Status PR, 2017). Sin embargo, no hay récord de las ayudas otorgadas. Por tanto, de las 15,000 personas que un momento estuvieron en refugios no se sabe cuántos regresaron a sus viviendas sin techo (tendencia que reseñó la prensa televisiva), se han ubicado con familiares o han recibido alguna de las opciones de ayuda ofrecidas por el Departamento de la Vivienda. Entre estas opciones se encuentra: acomodo en residenciales públicos, sección 8 o alojamiento temporero en hotel. En entrevista realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) al Secretario de Vivienda, este informó que, previo al huracán, la Administración de Vivienda Pública tenía 1,500 viviendas disponibles, de las cuales, a casi tres meses del huracán, se habían ocupado cerca de 800. Dada la alta necesidad de vivienda, la asignación de las unidades disponible parece ir demasiado lento. El Departamento de Vivienda junto con FEMA iniciarán un programa de ayudas con un tope de hasta \$20,000 para reparaciones de hogares afectados y anticipan impactar 75,000 viviendas, sin embargo, el programa no comenzaría hasta finales de diciembre de 2017 o enero de 2018 (Banuchi, 2017).

En los primeros días luego de María fueron las poblaciones aisladas que perdieron acceso a agua y alimentos, los pacientes con enfermedades crónicas que vieron sus tratamientos interrumpidos y las familias que perdieron sus viviendas los que encaraban las necesidades más apremiantes. Informes en la prensa evidenciaban que los suministros no estaban llegando a las comunidades más necesitadas y muchos alcaldes levantaban la voz de alerta debido a que no conseguían la ayuda necesaria para sus comunidades. De acuerdo con la información del CPI, los suplidos de agua, comida y toldos que tenía FEMA en Puerto Rico se habían agotado a dos días del paso del huracán, por lo que hubo que esperar que

llegaran nuevos suministros. El suplido de suministros a las comunidades empezó a normalizarse alrededor de dos semanas luego del huracán. La falta de electricidad provocó la ausencia de servicios médicos, lo que ocasionó una crisis en los servicios de salud. Los hospitales que operaban lo hacía parcialmente, no obstante, no hay una idea clara de qué sucedió con los pacientes que ocupaban camas en los hospitales que tuvieron que cerrar (Sosa Pascual & Mazzzei, huracán María: donde falló el operativo de emergencia, 2017). La falta de electricidad también trajo serias dificultades para pacientes crónicos que dependen de equipo eléctrico. Al mismo tiempo, la falta de servicio de agua potable suscitó otros problemas de salud al provocar que la población comenzara a utilizar cuerpos de agua que podían estar contaminados para usos personales. Esto ocasionó un brote de leptospirosis que provocó varias muertes, entre otros problemas de salud.

A pesar de que el gobierno ha mantenido en 64 la cifra oficial de muertes relacionadas al huracán María, de facto se sabe que la cifra es mucho mayor. Los primeros indicios de problema se dieron cuando las morgues de los hospitales y las funerarias que estaban funcionando comenzaron a saturarse de cadáveres. Un reportaje realizado por la cadena CNN, que entrevistó 112 funerarias, estimó en 499 las muertes relacionadas al huracán al mes de su paso (CNN, 2017). Pero la evidencia más contundente salió a la luz cuando el CPI logró obtener los datos de muertes reportadas al Registro Demográfico. En los mismos se encontró que el número de muertes durante los 40 días posteriores al huracán excedía las 1,000 al mismo periodo para años anteriores, esto a pesar de la reducción en población total debido a la migración (Investigativo, 2017). Desde el 20 de septiembre, las muertes diarias aumentaron un promedio de 43%. Los días más críticos fueron el 21 de septiembre y el 25 de septiembre, días en que las muertes diarias sobrepasaron por 80% las de los dos años anteriores. La mayoría de las personas que murieron eran mayores de 50 años, muchos de ellos en hospitales y asilos. Entre los renglones donde se encontró un aumento en el número de muertes fue en las relacionadas a diabetes, alzheimer,

paro cardíaco, fallo renal, hipertensión, neumonía y otras enfermedades respiratorias (Sosa Pascual, 2017). En la medida que los servicios básicos de agua potable y electricidad no sean restablecidos a la normalidad, es de esperarse que las tasas de mortalidad continúen sobre los niveles históricos.

Es importante recalcar que la mayoría de estas muertes no se deben al efecto directo del fenómeno, como inundaciones, derrumbes u otros tipos de impacto directo, sino que surgen debido a las condiciones de vulnerabilidad de la población. Muchas de estas se pudieron haber evitado con un proceso de preparación, y planes de mitigación que tomaran en cuenta las necesidades de la población y a través de una respuesta más rápida y efectiva de las entidades concernientes.

EL ROL DEL GOBIERNO

Ante la realidad de una población altamente vulnerable, queda preguntarnos qué podemos hacer para que “Puerto Rico se levante” no implique dejar a muchos de nuestros hermanos atrás o empujarlos fuera de la Isla.⁵ Una respuesta obvia sería un sistema de respuesta y recuperación enfocado en las necesidades de los más vulnerables. Sin embargo, esta no ha sido nuestra experiencia, por lo menos no desde las agencias gubernamentales, tanto a nivel del gobierno central en Puerto Rico como a nivel del gobierno federal.

Ha quedado demostrado en los grandes huracanes como Andrew, Katrina y María que la respuesta del gobierno federal es inadecuada para desastre de esta magnitud en los que se requeriría promover la iniciativa y la innovación en lugar de regirse por aspectos procesales y jurisdiccionales, lo que promueve la burocracia excesiva (Ink, 2006). La centralización de los proceso de respuesta y recuperación por parte del gobierno federal limitan tanto el rol del gobierno central como el rol de los municipios. Expertos en el

⁵ “Puerto Rico se levanta” es la frase acuñada por los medios televisivos y adoptada por las autoridades para motivar la población en el periodo de mitigación y recuperación.

tema, al analizar la respuesta del gobierno federal a Katrina, advierten que la fusión de FEMA con el Homeland Security ha promovido dicha centralización y reducido la capacidad y facilidad de acción de FEMA en desastres naturales (Ink, 2006) (Menzel, 2006). Ink (2006) recomienda que expertos en gerencia coordinen las labores de recuperación, enfatizando en la simpleza, el rendimiento de cuentas y la transparencia, así como la adaptabilidad y la empatía con las víctimas. Es lamentable que a pesar de todos los informes preparados luego del huracán Katrina con relación al desempeño de FEMA no ha habido una revisión real de los procesos de la agencia. La lentitud y la excesiva burocracia siguen siendo el talón de Aquiles de FEMA. En el caso de Puerto Rico, lo hemos visto en la dilación en la provisión de toldos para los hogares que quedaron sin techo, en la tardanza en la preparación y operación de los centros de ayuda, en la pobre organización del proceso de contratación de personal temporero, la excesiva petición de documentos a los municipios, e incluso, en la dilación en la ayuda a nivel estatal. Al 22 de diciembre de 2017, el Gobierno de Puerto Rico, ante los serios problemas de liquidez que confrontaba, aguardaba por el préstamo a otorgarse a través del programa de préstamos a comunidades afectadas por desastres. Sin embargo, personal de FEMA indicó a la prensa que no podía proveer un fecha para completar la transacción ya que estaba en espera de recibir comentarios de sus colaboradores en el tema (González, 2017). Esto demuestra su falta de sentido de urgencia. En general se ha percibido que la respuesta del gobierno federal ha estado marcada por la lentitud y la inacción (Sosa Pascual & Mazzzei, 2017).

Por otro lado, la respuesta del gobierno central ha enfocado en la solicitud de fondos a las agencias federales y no en la acción proactiva. Ciertamente, la falta de liquidez ha jugado un papel importante en limitar la respuesta del gobierno central, no obstante, hay otros factores que también han reducido la efectividad de la misma.

La falta de preparación fue uno de los factores. El Gobierno de Puerto Rico, claramente, no estaba preparado para la pérdida de comunicación y los niveles de aislamiento de comunidades que se dieron luego del huracán. A pesar de que previo a la llegada

de María la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicó estar lista para comenzar un proceso de recuperación del sistema, lo cierto fue que luego del paso del huracán no habían suficientes suministros ni existían acuerdos previos con otras compañías para los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica, a pesar de que se sabía que la disminución en la plantilla de empleados de la AEE hacía imposible una pronta recuperación.

Los cambios institucionales también entorpecieron la labor de mitigación y recuperación. Durante el 2017, como parte de la reorganización gubernamental, se unieron varias agencias bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad, entre estas, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD). Reestructuración similar a la que ocurrió con FEMA y el HomeLand Security en EE.UU. Epifanio Jiménez, ex director de la AEMEAD y experto en el tema, ha criticado públicamente esta decisión. La reorganización de la agencia relegó a los expertos en manejo de emergencia a un segundo plano. El papel protagónico lo tomó el jefe del recién creado Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera, quien no es experto en el manejo de desastres. Epifanio Jiménez ha sido también un duro crítico del proceso de manejo de emergencia debido a que, a pesar de la existencia de un Plan Catastrófico de Huracanes que determina las acciones a seguir y sus responsables en momento críticos, el mismo no se siguió y parece desconocerse por la mayoría de los jefes de agencia (Ruiz Kuilan, 2017).

La pérdida de confianza en el gobierno también se convierte en un aspecto limitante. A nivel de la ciudadanía, la falta de información real sobre el proceso de recuperación ha causado desconfianza y ha limitado la capacidad de respuesta de muchos individuos e instituciones privadas. Los dos ejemplos más claros de la falta de credibilidad han sido: la negativa del gobierno a aceptar el número real de muertes relacionadas al huracán y la insistencia del gobernador Ricardo Rosselló en que para el 15 de diciembre de 2017 el 95% de los abonos iban a tener electricidad. De acuerdo con el portal de STAUSPR, al 22 de diciembre de 2017 la AEE había alcanzado un 65% de generación, sin embargo, se estimaba que más de

la mitad de la población aún no tenía energía eléctrica. A esa fecha aún quedaban ocho municipios completamente carentes de electricidad. Estos son: Culebra, Naguabo, Maunabo, Yabucoa, Patillas, Morovis, Ciales y Adjuntas. Los datos del PRCS indican que entre estos, en Maunabo, Patillas y Morovis más de la mitad de su población es pobre, mientras que en Ciales y Adjuntas el por ciento de la población que es pobre sobrepasa el 60%.

La falta de credibilidad del gobierno también se ha visto opacada por el escándalo resultante de la contratación de Whitefish Energy Holdings, una empresa pequeña de Montana con poca experiencia, contratada por la AEE para el trabajo de reconstrucción del sistema eléctrico. Más aún, la AEE no pidió ayuda a la Asociación Americana de Electricidad Pública (APPA, por sus siglas en inglés) previo a dicha contratación. En vista de la controversia surgida, el contrato fue cancelado y se establecieron acuerdos con APPA. El acuerdo inicial con Whitefish no solo retrasó los procesos de reconstrucción, sino también sirvió de pie forzado para que miembros del Congreso de EE.UU. expresaran públicamente desconfianza en el Gobierno de Puerto Rico, lo que también puede afectar la aprobación de fondos federales para la reconstrucción.

La experiencia a nivel de gobiernos municipales puede ser muy variada, lo que debe estudiarse más a fondo y de donde pueden salir lecciones importantes. En la medida que surjan datos oficiales del proceso de recuperación por municipios se podrá contrastar el desempeño de los distintos gobiernos municipales. Una cosa que queda clara es que, en medio de la emergencia, fueron los gobiernos municipales los únicos con información sobre lo que estaba sucediendo localmente, lo que reafirma la necesidad de que estos sean la primera línea de ayuda. Sin embargo, para muchos alcaldes conseguir la ayuda necesaria para sus constituyentes durante las primeras semanas fue cuesta arriba. El limitado flujo de ayuda federal se complicó con la crítica situación fiscal de muchos municipios.

María puso en evidencia las fallas en el funcionamiento del sistema federalista en relación al manejo de la emergencia. Birkland & Waterman (2008) señalan que a pesar de que la Ley Stafford, que

rige los procesos de manejo de emergencias a nivel federal, claramente estipula que los gobiernos locales deben ser la primera línea de respuesta, los gobiernos estatales y locales han cedido su liderazgo al gobierno federal a cambio de la promesa de más fondos. También indican que la ubicación de FEMA bajo la sombrilla de Homeland Security ha propiciado mayor tendencia a la centralización a nivel federal. Además, destacan que las herramientas utilizadas por el gobierno federal parten en su base de los conceptos afines a los mercados privados, como la otorgación de seguros y préstamos. Esto hace la centralización en las acciones del gobierno federal más detrimental para las poblaciones vulnerables.

El trastoque de los roles intergubernamentales se vio claramente reflejado luego del paso de María por Puerto Rico. Durante las primeras dos semanas FEMA buscaba controlar el manejo de los suministros, tarea que luego pasó al ejército, mientras el Gobierno de Puerto Rico permanecía reunido en el Centro de Operaciones, y parecía estar más concentrado en las peticiones de fondos federales y la coordinación con las agencias federales que en poner en práctica los procesos de mitigación y recuperación. Mientras tanto, los alcaldes clamaban por ayuda, al reconocer las necesidades de sus constituyentes, pero carecen de los recursos necesarios para satisfacerlas. Ante esta debacle gubernamental fueron las instituciones comunitarias, voluntarias y sin fines de lucro las que sirvieron de salvavidas a muchos ciudadanos.

LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL SOCIAL

Un aspecto que ha recibido bastante atención reciente en la literatura es la importancia del capital social para lograr la recuperación y minimizar daños ante fenómenos naturales. Putnam (1994) describe el capital social como “las características de la organización social, como la existencia de redes, normas y confianza que facilitan la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo” (p. 6). Estudios comparativos muestran que aquellas comunidades, ciudades o países con mayor capital social pueden recuperarse más

rápidamente. También recalcan la importancia del capital social para minimizar las pérdidas y sufrimientos de los grupos más vulnerables. Munasinghe (2007) hace un recuento de cómo, luego del tsunami de 2004 en Sri Lanka, fueron las comunidades locales y la sociedad civil quienes se encargaron de buscar sobrevivientes, establecer centros de refugiados, repartir los suministros que llegaban de entidades privadas e incluso convocarse para hacer un plan de recuperación. En fin, fue la sociedad civil quien lideró la etapa de rescate. Un argumento similar lo establece Aldrich (2010) al comparar la recuperación en New Orleans a un año de Katrina con la recuperación de Kobe, luego del terremoto de 1995, y la de Talmi Nadu en India luego del tsunami de 2004. A pesar de Kobe sufrir un nivel de daño mayor y de Talmi Nadu ser mucho más pobre que New Orleans, la recuperación en ambos lugares fue mucho más rápida. Lo que Aldrich adjudica al elemento del capital social.

La importancia del capital social está en su capacidad de promover métodos informales de seguro y financiamiento, crear redes de apoyo e información, proveer asistencia física, facilitar la implantación de planes de recuperación y la organización de comunidades para movilizarse en acciones colectivas en busca del bien común. Una comunidad con un fuerte capital social puede prepararse mejor previo a un huracán, recuperarse más rápido y de manera más solidaria.

RECOMENDACIONES DE CARA AL FUTURO

En miras hacia el futuro es importante demandar acciones del gobierno que redunde en menos vulnerabilidad para los sectores desventajados, entre estos:

- mejorar el acceso al financiamiento para todos los sectores,
- crear planes de respuesta más ágiles que tomen en consideración las restricciones de los más necesitados,
- mejorar el acceso a viviendas de calidad, empleos dignos y servicios de salud y educación adecuados,
- mejorar las políticas de protección de los grupos marginados en situaciones de desastre, y

- promover mayor cobertura y accesibilidad de seguros contra desastres.

Para lograr planes de acción dirigidos a las comunidades más vulnerables se debe realizar un “mapeo” de vulnerabilidades de la población a nivel de barrios, municipios y a nivel Isla para entender las necesidades que puede enfrentar cada localidad. Estos pueden utilizar como base los mapas del ATSDR, así como información adicional relacionada a diversos factores de vulnerabilidad atemperados a la realidad puertorriqueña. También es importante que el plan estratégico cuente con el gobierno local como primera línea de respuesta y asegure que los municipios tengan los recursos disponibles para hacer frente al desastre inmediatamente después que este ocurra.

Además, es importante considerar que una comunidad con un capital social fuerte puede cubrir algunas de las deficiencias en la respuesta gubernamental y abonar a mejorar los sistemas de respuesta a través del tiempo. Por tanto, es imperativo que en la coyuntura actual evaluemos nuestro capital social. La literatura en el tema incluye entre las señales de un capital social fuerte las siguientes: el nivel de confianza en los conciudadanos y el gobierno, la propensión a participar de “deberes cívicos”, habilidad para movilizar la acción colectiva, la ausencia de respuestas violentas y la permanencia en el lugar. En medio de la catástrofe provocada por María hemos visto una gran movilidad de ayuda, en especial de la diáspora puertorriqueña, lo que evidencia unos nexos fuertes. Sin embargo, levanta preocupación el éxodo masivo, así como la ocurrencia de incidentes de saqueo que no solían darse anteriormente en Puerto Rico como indicativo de que en nuestras comunidades el capital social está deteriorándose. Ante esta coyuntura nos toca a todos, incluyendo al gobierno, entender la importancia de fortalecer el capital social de nuestras comunidades. La literatura en el tema hace una serie de recomendaciones que son imperativas en Puerto Rico hoy día. Entre éstas están:

- evitar el desplazamiento de la población y la fraccionización de las comunidades;⁶
- promover la acción comunitaria y la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones;
- identificar comunidades vulnerables y promover la creación de redes y organizaciones comunitarias, trabajo que el sector ONG ha realizado en algunas ocasiones, pero debe ampliarse y adoptarse por los gobiernos municipales; y
- promover los lazos comunitarios como el consumo en negocios locales y el trabajo voluntario.

Si queremos un Puerto Rico más resiliente es importante que la sociedad civil, las organizaciones no-gubernamentales, así como los gobiernos municipales tomen un rol activo en el fortalecimiento del capital social. De lo contrario, corremos el riesgo de que con cada crisis económica y con cada desastre natural la Isla siga vaciándose y nuestros grupos más vulnerables continúen al proceso hacia el exilio o al rezago económico.

Para finalizar, es importante recalcar la necesidad de instituir herramientas de transparencia y rendición de cuentas que permitan velar por el mejor uso posible a los fondos que se reciban para la recuperación. Uno de los factores que propende a mayor corrupción en Puerto Rico es el ingreso de fondos federales al gobierno para utilizarse en subcontrataciones (Segarra Alméstica, 2010). La llegada de grandes cantidades de fondos federales para proyectos de reconstrucción podría prestarse para beneficiar a determinados grupos de interés, en lugar de utilizarse para cubrir las necesidades de la mayoría de la población. La mejor manera de evitar que esto suceda es instituyendo mecanismos que aseguren el acceso ciudadano a la información económica, financiera y de contratación de las agencias, así como mecanismos que midan la efectividad de las inversiones que se realicen con esos fondos.

⁶ Esto es justo lo opuesto a la política que ha seguido el gobierno federal en Puerto Rico luego de María, que en algunos casos ha facilitado el traslado.

REFERENCIAS

- Aldrich, D. (2010). Fixing recovery: social capital in post-crisis resilience. *Journal of Homeland Security*, 6, 1-10.
- Banuchi, R. (2017, diciembre 14). Urgen opciones de vivienda digna para refugiados tras María. Retrieved from Centro de Periodismo Investigativo: <http://periodismoinvestigativo.com/2017/12/urgen-opciones-de-vivienda-digna-para-refugiados-tras-maria/>
- Birkland, T., & Waterman, S. (2008). Is Federalism the Reason for Policy Failure in Hurricane Katrina? *Publius*, 38(4), 692-714.
- Bui, A. T., Dungey, M., Nguyen, C. V., & Pham, T. P. (2014). The impact of natural disasters on household income, expenditure, poverty and inequality: Evidence from Vietnam. *Applied Economics*, 46(15), 1751-1766.
- CNN. (2017). ¿Cuántos muertos dejó en Puerto Rico el huracán María realmente? Recuperado el diciembre de 2017, de CNN: <http://cnnespanol.cnn.com/2017/11/30/cuantos-muertos-dejo-en-puerto-rico-el-huracan-maria-realmente-investigadores-tienen-esta-teoria/#0>
- El Nuevo Día y Primera Hora*. (2017). María un nombre que no vamos a olvidar. Recuperado el diciembre de 2017, de <https://huracanmaria.elnuevodia.com/>
- Flanagan, B., Gregory, E., Hallisey, E., Heitgerd, J., & Lewis, B. (2011). A Social Vulnerability Index for Disaster Management. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 8(1).
- González, J. (22 de diciembre de 2017). Sin certeza el préstamo de FEMA la gobierno. *El Nuevo Día*.
- Ink, D. (2006). An Analysis of the House Selected Committee and White House Reports on Hurricane Katrina. *Public Administration Review*, 66(6), 800-807.
- Investigativo, C. d. (21 de diciembre de 2017). Lanzan cuestionario en línea que traerá transparencia al recuento de las muertes por el huracán María. Obtenido de *Centro de Periodismo*

Investigativo: <http://periodismoinvestigativo.com/2017/12/lanzan-cuestionario-en-linea-que-traera-transparencia-al-re-cuento-de-las-muertes-por-el-huracan-maria/>

- Karim, A., & Noy, I. (2016). Poverty and Natural Disasters: A Meta-Regression Analysis. *Review of Economics and Institutions*, 7(2), Artículo 2.
- Karim, A., & Noy, I. (2016). Poverty and Natural Disasters: A qualitative survey of the empirical literature. *The Singapore Economic Review*, 61(1), 1640001 (1-36).
- Marcelin, J. M., Horner, M. W., Ozguen, E. E., & Kocatepe, A. (2016). How does accessibility to post-disaster relief compare between the aging and the general population? A spatial network optimization analysis of hurricane relief facility location. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 15, 61-72.
- Masozera, M., Bailey, M., & Kerchner, C. (2007). Distribution of impacts of natural disasters across income groups: A case study of New Orleans. *Ecological Economics*, 63, 299-306.
- McMahon, M. (2007). Disaster and Poverty: Editorial. *Disaster Manage Response*, 4, 95-97.
- Menzel, D. (2006). The Katrina Aftermath: A Failure of Federalism or leadership? *Public Administration Review*, 66(6), 808-812.
- Morris, S. S., Neidecker-Gonzales, O., Carletto, C., Munguía, M., Medina, J. M., & Wodon, Q. (2002). Hurricane Mitch and the livelihood of the rural poor in Honduras. *World Development*, 30(1), 49-60.
- Munasinghe, M. (2007). The importance of social capital: Comparing the impacts of the 2009 Asian Tsunami on Sri Lanka and the Hurricane Katrina 2005 on New Orleans. Comentry. *Ecological Economics*, 64, 9-11.
- Padilla-Elías, N., Miranda Bermúdez, J., Algarín Zayas, G., Peña-Orellana, M., Rivera-Gutiérrez, R., Nieves Santiago, A., . . . Robles-García, H. (2016). Una mirada a las poblaciones vulnerables en Puerto Rico ante desastres. *Caribbean Studies*, 44(1-2), 141-163.

- Pastor, M., Bullard, R., Boyce, J. K., Fothergill, A., Morello-Frosch, R., & Wright, B. (2006). Environment, Disaster and Race after Katrina. *Race, Poverty & Environment*, 13(1), 21--26.
- Putnam, R. (1994). Social Capital and Public Affairs. *Bulletin of the American Academy of Arts and Science*, 47(8), 5-19.
- Ruggles, S., Genadek, K., Goeken, R., Grover, J., & Sobek, M. (2017). Integrated Public Use Microdata Series Version 7.0 [dataset PRCS 2015 five year]. Minneapolis: University of Minnesota. Obtenido de <https://doi.org/10.18128//D010.V7.0>
- Ruíz Kuilan, G. (2017 de noviembre de 2017). El gobierno no usó su plan catastrófico. *El Nuevo Día*.
- Sawada, Y., & Takasaki, Y. (2017). Natural Disaster, Poverty and Development: An Introduction. *World Development*, 94, 25.
- Segarra Alméstica, E. (2010). *Factores que inciden en el mal uso de los recursos del gobierno y la corrupción en Puerto Rico*. Universidad de Puerto Rico, Departamento de Economía. San Juan, Puerto Rico: Unidad de Investigaciones Económicas. Obtenido de Factores que inciden: <http://economia.uprrp.edu/5Factores.pdf>
- Segarra Alméstica, E., Correa Matos, C., Rodríguez Roldán, N., & Carrasquillo Casado, B. (2016). El fomento del empresarismo como política pública y su impacto en la reducción de la pobreza. *Quest*. San Juan, Puerto Rico.
- Segarra-Alméstica, E., & Cordero-Nieves, Y. (2016). *Informe sobre la Administración de Servicios de Médicos de Puerto Rico*. San Juan, Puerto Rico: Centro de Estudios Multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos, UPR-RP.
- Sosa Pascual, O. (2017 de diciembre de 2017). Se disparan en casi mil las muertes tras María. Obtenido de *Centro de Periodismo Investigativo*: <http://periodismoinvestigativo.com/2017/12/se-disparan-en-casi-mil-las-muertes-tras-maria/>
- Sosa Pascual, O., & Mazzzei, P. (22 de octubre de 2017). Huracán María: donde falló el operativo de emergencia. Obtenido de Centro de Periodismo Investigativo: <http://periodismoinves->

tigativo.com/2017/10/huracan-maria-donde-fallo-el-operativo-de-respuesta/#

Status PR. (22 de diciembre de 2017). Obtenido de <http://status.pr/>